



**“EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”**

**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Alumna: Juliana María Rodríguez Alonso
Profesor Guía: Francisco Pino**

Santiago, junio 2016

Agradecimientos

Agradezco al Profesor Francisco Pino, por su orientación e invaluable observaciones durante todo el proceso.

Agradecimientos al proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y a sus principales donantes (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y Vanderbilt University) por poner a disposición los datos.

De igual manera agradezco al Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (CERAC) por colocar a disposición los datos sobre la tipología de los municipios de Colombia según el conflicto armado interno entre 2000 y 2012.

Quiero agradecer al Programa Conjunto de Japón y el Banco Mundial de Becas de Posgrado (JJ/WBGSP), por darme la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Latinoamérica.

Por último y no menos importante, agradezco a mi familia y amigos por sus comentarios y buenos consejos. En particular, agradezco a mis padres quienes sin su apoyo esta meta no la hubiera sido posible.

“El impacto de la violencia en la opinión pública sobre la resolución del conflicto armado en Colombia”

Resumen

Este documento examina de manera empírica qué sucede con la actitud de las personas respecto a la posible salida negociada del conflicto armado que vive el país, cuando los individuos revelan conocer de manera cercana a víctimas del conflicto. Usando datos de la opinión pública para Colombia con preguntas relacionadas con el proceso de paz y las formas de victimización que más han padecido los colombianos, se encuentra que los individuos que han vivido de manera directa o por medio de algún familiar la violencia presentan una menor probabilidad de apoyar la negociación. Esta posición se reafirma cuando el hecho victimizante fue responsabilidad de la guerrilla, cuando la pérdida familiar es reciente y cuando hay familiaridad con víctimas de desplazamiento. Por otro lado, de acuerdo a características poblacionales, la opinión respecto a la negociación es más favorable para los afrocolombianos, los indígenas, las personas mayores y de menores ingresos. Estos resultados demuestran que quienes se encuentren en la mesa de negociación deben tener en cuenta no solo la opinión general respecto al proceso de paz, sino la de aquellos cuyas vidas se vieron afectadas y que presentan mayor sensibilidad frente al tema.

Palabras clave: Opinión pública, conflicto armado, hechos victimizantes.

Código JEL: J18, F51, D74

INDICE

1. Introducción	1
2. Revisión de literatura	3
2.1. Exposición al conflicto y la opinión pública.....	3
2.2. El uso de la información sobre el conflicto en Colombia	4
2.3. Contexto del conflicto colombiano	7
3. Datos y Estadística descriptiva	12
3.1. Encuestas de opinión en Colombia	12
3.2. ¿Quiénes son víctimas del conflicto?.....	13
3.3. Estadística Descriptiva	14
3.4. Hipótesis del estudio	20
4. Marco Empírico.....	21
5. Resultados Empíricos	23
5.1. Efectos heterogéneos de la familiaridad con los hechos victimizantes	27
5.2. Efectos de victimización por causa de la guerrilla y temporalidad	30
6. Discusión y Conclusiones	34
Referencias.....	36
Anexos	38

1. Introducción

El presente estudio se enfoca en examinar de manera empírica cómo se ve afectada la opinión de las personas, respecto a la posible salida negociada del conflicto armado que vive Colombia, cuando los individuos revelan conocer de manera cercana o familiar a víctimas del conflicto. Identificando el impacto que tiene la vinculación con diferentes tipos de hechos victimizantes, junto con características específicas de la población en la opinión pública y de esta manera contribuir a entender que si bien existe una opinión generalizada sobre el apoyo a la salida negociada, al detallar en poblaciones específicas y situaciones de victimización el apoyo no es colectivo.

La razón por la cual el estudio se enfoca en la opinión de las víctimas en Colombia, es porque si bien la violencia ha afectado a toda la sociedad, esta se ha ensañado de manera más cruel con los excluidos y los vulnerados. Los datos que registran las violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH) constatan que la guerra no ha afectado a todos por igual. La guerra recae especialmente sobre las poblaciones más pobres del país, sobre los pueblos afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra los opositores y disidentes, y afecta de manera particular a las mujeres, a los niños y niñas (GMH, 2013).

Autores como Jaeger, Klor, Miaari, & Paserman, (2012) demuestran que las personas que están expuestas al conflicto, presentan posiciones más radicales frente a una posible salida negociada. Cuando hay un aumento en el número de homicidios dentro del área de vivienda, las personas reflejan un menor apoyo para las negociaciones alejándose de posiciones moderadas, especialmente si los hechos ocurridos son muy cercanos a la fecha de las encuesta. Resultados similares encuentran Gartner & Segura, (1998), quienes señalan que, intuitivamente, la muerte de ciudadanos, incluyendo aquellas que son más cercanas como familiares y amigos por causa de la guerra, darán una percepción mayor alcance respecto al conflicto y las decisiones tomadas por los líderes.

Las estimaciones revelan que las personas que han vivido más cerca el conflicto, por razones familiares o fueron ellos mismos víctimas, son menos propensos a optar por una salida negociada, indicando una mayor sensibilidad frente al tema, especialmente si el hecho es reciente y fue la guerrilla el responsable de los hechos. Esto es, cuando las personas declaran conocer a un familiar que perdió la vida a causa del conflicto en los últimos doce meses, la probabilidad de apoyar la negociación disminuye en 13.8 puntos porcentuales (pp), respecto a los que la pérdida familiar fue con mayor anterioridad. Adicionalmente, al estimar que sucede con la opinión pública cuando los

entrevistados manifiestan que el causante del hecho victimizante fue la guerrilla, el resultado es una menor proporción hacia la negociación en los tres hechos evaluados: pérdida (2.6pp), desplazamiento (6.5 pp) y migración al exterior (8.1 pp). Respecto a los grupos poblacionales, se encuentra una correlación positiva entre los distintos tipos de razas y la salida negociada del conflicto, especialmente para la población indígena y afrocolombiana.

Tradicionalmente, las encuestas de opinión se caracterizaron por una falta de interés, información y entendimiento por parte de los entrevistados respecto a las materias sobre las cuales eran indagados, mostrando inestabilidad entre la opinión pública y los hechos. Sin embargo, un número reciente de estudios han demostrado que las encuestas de opinión muestran cierta racionalidad y consistencia a los eventos que suceden, reflejan la sensibilidad que frente a temas tan controversiales y dolorosos, como lo es la guerra interna en un país (Fielding & Penny, 2009). En los casos donde se adelantan proceso de negociación, la opinión pública juega un papel determinante por tres factores: i) las preferencias del público con respecto a los tomadores de decisiones, los actores, las instituciones y otros factores internos; ii) la importancia del tema en fase de negociación; y iii) el poder de la opinión pública para ratificar un posible acuerdo (Trumbore, 1998).

Como lo señala Gartner & Segura, (1998), conocer la opinión de las víctimas es importante porque permite tener un mejor entendimiento de su rol en el conflicto y contribuirá, tanto a la construcción de la teoría como al desarrollo de políticas públicas. Aplicado al caso colombiano, lo anterior se interpretaría en el hecho de que las opiniones de las víctimas en particular son y serán importantes para legitimar el proceso de paz ya que los negociadores han colocado frente y al centro los derechos de las víctimas (Carlin, McCoy, & Subotic, 2016).

El documento está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se revisa brevemente la literatura relacionada con el nexo entre el conflicto armado y la opinión pública, así como el uso de datos para dar una explicación empírica a los diferentes temas que se despliegan del conflicto. De igual manera, se presenta un breve contexto del conflicto colombiano, con el fin de comprender porque se genera, como fue evolucionando y cuales han sido los actores del mismo. En la sección 3 se describe los datos de la encuesta, una descripción sobre las víctimas que a la fecha se encuentran registradas en el país y las hipótesis que se desean testear. En la sección 4, se describe la metodología utilizada para modelar la percepción de la opinión de los colombianos respecto a la posible salida del conflicto. La sección 5 presenta el análisis de los resultados y la validación de las

hipótesis. Finalmente, en la sección 6 se realiza una discusión sobre los resultados y las principales conclusiones.

2. Revisión de literatura

2.1 Exposición al conflicto y la opinión pública

La literatura sobre la relación entre conflicto armado y las preferencias de la población afectada, medida por la opinión pública, ha aumentado en las últimas décadas. Si bien este tema ha sido abordado principalmente desde la óptica de la ciencia política, cada vez se observa más el uso de herramientas económicas y de bases de datos como sustento empírico. Tal como señalan Gartner & Segura (1998) la opinión pública juega un papel importante tanto en el inicio del uso de la fuerza militar como en la finalización de los conflictos. La influencia de las víctimas de los conflictos en la opinión es parte central del argumento de la paz democrática. Y en el caso de Colombia, las opiniones de las víctimas en particular son importantes para legitimar el proceso de paz ya que los negociadores han colocado a las víctimas en el centro de la discusión (Carlin et al., 2016).

Uno de los primeros trabajos realizado es el de Mueller (1973) cuya teoría representa uno de los enfoques más usados para entender el nexo entre víctimas de conflicto (número de bajas) y la opinión pública. Examinando las guerras de Vietnam y Corea, argumenta que el “mejor” predictor de la opinión en tiempos de guerra es la acumulación logarítmica de víctimas, puesto que “el público es más sensible a las pérdidas iniciales que se dan en los comienzos de la guerra y este va disminuyendo, más lento, hacia el final de las guerras” (Mueller, 1973). Sin embargo, autores como Gartner & Segura, (1998), debaten este argumento y demuestran que este indicador presenta deficiencias como: i) el efecto del tiempo solo, genera correlaciones espurias entre la acumulación de víctimas y la opinión; ii) homogeniza los conflictos que tienen patrones diferentes de acumulación de víctimas y iii) subestima la importancia de eventos como choques exógenos. Los autores sugieren que el predictor de opinión debe ser el relacionado con las bajas marginales ya que éstas son un reflejo de lo que está sucediendo en el entorno, no es un indicador monótono y por lo tanto, la opinión fluctuará más con los shocks que presenta el conflicto.

Por otra parte, la existencia de encuestas ha permitido hacer análisis de los factores que llevan a tomar decisiones y cambios en los niveles de negociación. Haciendo uso de las encuestas se encuentra que la opinión pública evoluciona con el tiempo cuando se tratan de temas relacionados con defensa y seguridad nacional. Por ejemplo, Fielding & Penny, (2009) basan su análisis

estadístico en los factores que llevan a variar las opiniones en el nivel de apoyo durante el proceso de paz de Oslo en 1993 del conflicto Israelí- Palestino. Los autores mostraron que existe una relación estable entre las facciones que apoyaban el proceso de paz y las variables que capturan la intensidad del conflicto como consecuencias económicas y el ambiente político, indicando que hay cierta racionalidad y consistencia con los eventos.

En esta misma línea de investigación, Jaeger, Klor, Miaari, & Paserman, (2012, 2014) analizaron empíricamente si la violencia generada por diferentes facciones palestinas es una táctica eficaz para conseguir el apoyo de la población y si esto llega a afectar la actitud radical frente al conflicto. Conectando las encuestas de opinión con la lista de víctimas mortales de Israelíes y Palestinos durante el período de la Segunda Intifada (2000- 2005) logran obtener las variaciones en tiempo y espacio entre víctimas y preferencias de la población. En sus investigaciones concluyen que se da poca evidencia para determinar que un aumento de la violencia por parte de las dos facciones palestinas más fuertes (Hamás y Fatah) genera un mayor soporte a sus acciones por parte de la población, ni que se generen posiciones más radicales frente al conflicto. Adicionalmente, encontraron que un aumento de las víctimas mortales, reflejan un menor apoyo por parte de la población para las negociaciones alejándose de posiciones moderadas, especialmente si los hechos ocurridos son muy cercanos a la fecha de las encuestas. Sin embargo, esta postura se disipa de manera constante en el tiempo y desaparece totalmente en el largo plazo. Por último, indican que la población joven que vivió durante el proceso de paz de Oslo, en promedio, muestran una tendencia más favorable a la negociación que lo predicho para su edad y otras características demográficas, comparado con aquellos que durante la juventud vivieron con más fuerza el conflicto (Primera Intifada, 1987). Concluyen así que un conflicto de largo plazo si radicaliza a la población.

2.2 El uso de la información sobre el conflicto en Colombia

Tal como se ha señalado anteriormente, las fuentes estadísticas se han convertido en herramientas necesarias para explicar las distintas dinámicas de los conflictos. En Colombia, esto no ha sido una excepción; instituciones de naturaleza pública, privada y no gubernamental han construido distintas bases de datos, bajo parámetros y metodologías propias sobre el conflicto armado en Colombia (Espinosa, 2011).

Restrepo, (2004) realiza una explicación sobre porqué es necesario contar con una medición del conflicto colombiano. De acuerdo con su criterio, “medir el impacto humano del conflicto permitiría aproximar, con un grado de confianza explícito, qué tanto se ha afectado la integridad de

las personas, combatientes o no, cuáles son los grupos o partes en el conflicto responsables de causar el mayor número de víctimas, cuáles son las características de éstas, en qué tipo de hechos se está causando el mayor costo humano del conflicto y en qué lugares del país se concentra el mayor número de víctimas”. Conforme con esta afirmación, la construcción de estas bases de datos y su conocimiento va más allá de la entrega de cifras para dar un registro de los resultados de un combate o un ataque, contar con esta información permitirá mejorar el diseño de políticas públicas orientadas a seguridad, a servicios básicos y sociales, con enfoque hacia las víctimas y las regiones que requieren mayor atención por parte del Estado. De esta manera, es posible señalar que, en la actualidad el país ha avanzado de manera significativa en la comprensión y análisis del conflicto y de sus víctimas, de la responsabilidad de los actores, desde un ámbito humano y gubernamental.

Entre las bases estadísticas que más destacan se encuentran las del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)¹; que fue la primera institución privada en construir una base de datos sobre el conflicto colombiano tipo serie de tiempo, en la que se detallan fechas, lugares, actores involucrados, tipos de ataque y el nivel de intensidad del conflicto, medido por el número de personas dadas de baja, heridas, detenidas y retenidas². Por otra parte, existen las bases de datos del gobierno colombiano, como son las del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, creado en 1999, y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creado en 2012. Ambas presentan datos a nivel municipal, departamental y nacional, con la diferencia que la primera, tiene registro desde el año 1998 hasta el 2012, y sus fuentes primarias eran los boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)³, los registros de prensa y la información de la Policía Nacional. En el segundo caso, la información proviene del registro que tiene el gobierno colombiano de personas que han declarado haber vivido situaciones de violencia, con el objetivo de brindar atención humanitaria en salud, educación, identidad, alimentación, entre otros, y fundamentalmente, en la reparación integral a las víctimas, conforme a lo estipulado en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Como bien lo menciona Espinosa, (2011) al ser de carácter oficial, son entidades que orientan su metodología y análisis según la política pública en materia de paz y de Derechos Humanos (DD. HH) de acuerdo a los gobiernos de turno.

¹ Es un centro de estudios y consultoría, con experticia en el procesamiento, elaboración, análisis y presentación de indicadores cuantitativos especialmente los relacionados con la violencia directamente asociada al conflicto armado y la violencia armada en su estrecha relación con el desarrollo.

² “La diferencia entre los detenidos y retenidos se basa en el hecho de que las personas detenidas están en manos del gobierno, ya sea con el cumplimiento de todos los requisitos legales o no, y las retenciones se llevan a cabo por los actores armados no estatales”(Restrepo, 2004).

³ Esta entidad desapareció en el 2011, sus funciones fueron asumidas por diferentes entidades del Estado.

Desde el punto de vista económico, existen una serie de trabajos que han involucrado la información del conflicto armado colombiano, para calcular el impacto que este ha tenido en el crecimiento económico, aportado así a la discusión sobre las consecuencias que este extenso y complejo conflicto ha traído a los sectores productivos de la economía, a la sociedad y al país general.

Estudios como el de Santa María, Rojas, & Hernández, (2013), demuestran que el crecimiento de los municipios, sin incluir ciudades principales, se ha visto afectado negativamente por los fenómenos de violencia, particularmente por la tasa de homicidios y ataques terroristas. En el caso de Villa, Restrepo, & Moscoso, (2014) desarrollan un análisis similar pero, en este caso enfocan su estudio en las consecuencias del conflicto armado y el crimen organizado en el ingreso departamental, usando como variables del conflicto los secuestros, homicidios y ataques unilaterales por parte de la guerrilla. Ambos estudios coinciden en afirmar que la violencia en el país ha tenido un costo, en términos de crecimiento, y desarrollo productivo. En cifras, el conflicto ha generado un atraso en la economía colombiana entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del PIB.

Por su parte, uno de los trabajos que más aprovechamiento hace de los datos de conflicto es el de Dube & Vargas, (2013). Este utiliza la base de datos de conflicto del CERAC, que detalla por municipio la intensidad y actores del conflicto para ver la relación que existe entre el comportamiento de la violencia en estas zonas cuando varía el precio de *commodities* intensivos en mano de obra y recursos naturales intensivos en capital. Llegan a demostrar que una disminución en el precio de productos como el café, reducen el salario de los trabajadores por lo que el costo de oportunidad de unirse a un grupo armado disminuye, aumentando la violencia de manera diferente en los municipios donde es más intensivo el cultivo y por lo tanto, intensificando el conflicto, reflejado en más enfrentamientos y más bajas. Mientras tanto, un aumento en el precio de recursos naturales como el petróleo o el carbón, genera un incremento en los ingresos percibidos por los municipios donde se realiza la explotación del recurso, vía mayor recuado de impuestos y transferencia de regalías, de tal manera que la intensidad del conflicto es distinta, ya que estará más enfocado en ataques guerrilleros y de paramilitares, y en aumento en el número de secuestros y de extorsiones.

Ahora bien, respecto al tema específico del presente trabajo, sobre la relación del conflicto y el apoyo o rechazo a una salida negociada, la mayoría se han realizado desde un enfoque distinto al aquí desarrollado. Son análisis cualitativos más cercanos hacia las áreas de comunicación y ciencias

políticas, tales como los realizados por Bonilla, (2004), Cárdenas, (2013) y Uribe, (2012). Sin embargo, en los dos últimos años, se han publicado trabajos como el de Matanock & Garbiras, (2015) y Carlin et al., (2016) con el interés de conocer el comportamiento de la opinión pública respecto a las implicaciones del proceso de paz y la justicia transicional que se aplicaría una vez finalizado el conflicto.

2.3 Contexto del conflicto colombiano

La mayoría de autores que documentan la historia del conflicto interno colombiano coinciden en señalar que es uno de los más prolongados y complejos que vive el mundo. Frente a otros conflictos internos, este presenta características particulares, que lo convierte en un caso especial de análisis. Así mismo, es un conflicto al que se ha buscado dar fin por diferentes vías, incluyendo el uso de la fuerza armada y los diálogos entre los actores involucrados. Sin embargo, a la fecha, éstos no han llegado a buen término.

Tal como lo caracterizan Restrepo, Spagat, & Vargas, (2004), el conflicto colombiano, a diferencia de muchos que se han presentado en otras naciones, no está definido por divisiones religiosas, étnicas o regionales; por lo que se puede ubicar en un contexto directamente económico, político y militar. Igualmente, estos autores dan como segunda característica “especial” la institucionalidad del país. Mientras que en el siglo XX, la mayoría de países latinoamericano enfrentaron largos períodos de gobierno autoritario, la democracia en Colombia permaneció estable.

Sin embargo, a pesar de esta tradición democrática, la violencia aparece en este contexto como resultado de la falta de capacidad del Estado y de los partidos políticos en brindar soluciones sociales y ofrecer servicios básicos como seguridad y justicia (Peco & Peral, 2005). Entre los años de 1946 -1966, período conocido como “La Violencia”, el país vivió un enfrentamiento por el control del Estado entre los principales partidos políticos: el partido Liberal y el partido Conservador. Como consecuencia de este enfrentamiento, en 1949 se da el nacimiento de las autodefensas campesinas, que dos décadas después darían paso a las guerrillas.

Los grupos guerrilleros se consolidan en Colombia a partir de la década de los sesenta. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se crearon en 1964 de origen campesino y orientación comunista. Durante un largo período de tiempo fue considerado como uno de los grupos armados con mayor número de combatientes en sus filas, no obstante, en la actualidad esta cifra se

ha reducido significativamente, llegando a 6.700 combatientes⁴. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue fundado en 1965, influido por la Revolución Cubana y los movimientos estudiantiles y al igual que las FARC este grupo ha disminuido el número de combatientes en los últimos años, que se estima cercano a los 1.500⁵.

Hasta finales de la década de los ochenta, el conflicto colombiano era esencialmente una consecuencia de la Guerra Fría, en la que los grupos guerrilleros recibían apoyo financiero del bloque soviético. Mientras tanto el gobierno estaba influenciado por la “Doctrina de la Seguridad Nacional” de Estados Unidos (Restrepo et al., 2004). Durante este tiempo, los grupos guerrilleros tomaron más fuerza debido a la incapacidad del Estado en dar soluciones sociales, al incremento de armas recibidas y por el aumento de la represión del gobierno hacia cualquier manifestación por parte de los grupos armados. Como señala Daniel Pécaut (1987), citado por Peco & Peral, (2005), en este momento “la cuestión guerrillera cambia, de esta manera, de naturaleza y de escala. De un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de la violencia y de los conflictos por la tierra, se transforma en un componente de un proceso que, por primera vez, percibe como objetivo la lucha por el poder”.

En 1982, se dan los primeros intentos de negociación con la guerrilla para finalizar el conflicto, el gobierno otorgaría una amnistía general, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y por el contrario el conflicto se intensificó, convirtiendo la década de los noventa en una de las más violentas vividas en el país. Como lo señalan Restrepo et al., (2004) entre los hechos que influyeron en la intensificación el conflicto en ese momento, están: primero, el desarrollo emergente de los carteles del narcotráfico, los cuales están asociados directamente con el aumento de la criminalidad en el país. Segundo, la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo guerrillero M-19; y tercero con los intentos de la guerrilla de las FARC de participar en política mediante el partido político, *Unión Patriótica (UP)*, que terminaron debido a que la mayoría de sus miembros fueron asesinados y otros abandonaron el país por amenazas contra sus vidas.

⁴Memorias al Congreso 2014-2015, Ministerio de Defensa de Colombia (2015). Es importante aclarar que adicional al número de combatientes se debe sumar las redes de apoyo del grupo guerrillero que sumarían alrededor de 8 mil integrantes. Por otra parte, otras fuentes indicarían un número mayor de combatientes: “Otros estudios de entidades como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Fundación Paz y Reconciliación sostienen que el grupo subversivo aún tendría entre diez mil y once mil combatientes y, con las redes de apoyo, alcanzaría los 30 mil integrantes”. (Diario El País, 2014).

⁵ Memorias al Congreso 2014-2015, Ministerio de Defensa de Colombia (2015).

Junto con el auge del narcotráfico, renace un actor del conflicto de los cuarenta, el paramilitarismo. Las raíces de este grupo se encuentran en los grupos de autodefensas, organizadas por los terratenientes como respuesta a las amenazas y constantes ataques de los grupos guerrilleros. Amparados en el Decreto-Ley 1699 de 1964, norma propia del estado de excepción, se autorizaba la creación de autodefensas; permitiendo armar a los campesinos para que sirvieran de apoyo a las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en los años ochenta en uno de los actores activos del conflicto (Peco & Peral, 2005). Fue solo hasta 1997 cuando las distintas facciones del paramilitarismo crearon una alianza denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su estrategia principal estaba dirigida a atacar a la guerrilla. Apoyados por los carteles del narcotráfico, sus actos dieron lugar a una larga serie de masacres a civiles, en su mayoría acusados de simpatizar con ideas de la izquierda. En el año 2003, el gobierno colombiano inició conversaciones con las AUC, que dieron como resultado la desmovilización de la mayor parte de sus integrantes⁶. Si bien esto se vio reflejado en una disminución en los índices de criminalidad, muchos analistas y grupos de derechos humanos coinciden en afirmar que han llegado nuevos grupos de paramilitares a tomar el control territorial y el poder que dejaron las autodefensas. Un ejemplo de esto son las denominadas Bacrim, bandas criminales emergentes vinculadas con el narcotráfico y con alianzas con la guerrilla.

A principios de los años noventa, los procesos de negociación desembocaron en la desmovilización de algunos de los grupos alzados en armas, entre esos el del grupo M-19, responsable de la toma al Palacio de Justicia en 1985⁷. Luego del primer fracaso de proceso de paz con la guerrilla de las FARC y el ELN, el gobierno de Andrés Pastrana, (1998 – 2002) llevó a cabo un diálogo formal con las FARC, denominado el *Proceso de Paz del Caguán*. Durante tres años, el gobierno desmilitarizó una zona del sur de Colombia, la cual se conoció como la *zona de despeje*. Sin embargo, el proceso se caracterizó por su falta de organización, las irregularidades en la zona de despeje, la falta de voluntad de las FARC y la improvisación del Estado. El 20 de Febrero de 2002 el presidente Pastrana termina las conversaciones de paz con la guerrilla y da fin a la zona de despeje. Tal como lo señala Bonilla (2004), la percepción de los ciudadanos era de tener un gobierno generoso, pero débil, y de una guerrilla arrogante y desbordada.

⁶ Para 2003, año en el que se da la desmovilización de este grupo, el número de integrantes estaba alrededor de 15.000 combatientes. (Revista Semana, 2011).

⁷ Entre 1990 y 1994 se desmovilizaron otros grupos armados: el PRT (1991), el Quintín Lame (1991), una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL) (1991) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) (1994).

Las encuestas, realizadas entonces, reflejaban un nivel de desacuerdo (68%) frente a la gestión del gobierno para lograr la paz con ese grupo guerrillero, así mismo, el porcentaje de población que tenía una imagen favorable de las FARC llegó a ser mínima, tan solo de 1% (IPSOS Public Affairs, 2012). Por lo tanto, si bien la guerrilla se había fortalecido económica y militarmente durante esos tres años de negociación, pues tenía la capacidad para lograr buena parte de sus objetivos por vía de la lucha armada, enfrentaba un retroceso en el terreno político (Peco & Peral, 2005).

Frente al fracaso en la negociación y el ambiente negativo de la opinión pública, en el 2002 es elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez. Durante su gobierno es implementada la política de *Seguridad Democrática* y se llevan a cabo las negociaciones con los grupos paramilitares, que dieron como resultado el desarme y desmovilización de sus integrantes. Los únicos acercamientos con la guerrilla de las FARC fueron para generar acuerdos humanitarios con el fin de liberar a los secuestrados que tenían en su poder ese grupo guerrillero⁸.

El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Juan Manuel Santos inició un nuevo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, con la firma del “*Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*”. Para este proceso, se dispuso realizar unas mesas de negociación, denominadas “ciclos de conversación” donde participan las delegaciones de ambas partes con acompañamiento internacional, en los que se encuentran como garantes el Gobierno de la República de Cuba y de la Republica de Noruega; y como acompañantes: Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y Chile. El proceso cuenta con una agenda de seis puntos, discutidos durante los ciclos de conversación y de los cuales cuatro ya han alcanzado un acuerdo: la Política de Desarrollo Agrario Integral, participación en política, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas del Conflicto⁹.

Cuando se inició esta negociación, se realizaron diferentes encuestas para indagar qué opinaban los colombianos sobre esta nueva posibilidad de alcanzar la paz en el país. Los resultados revelaban una aprobación entre el 72 -77% a la decisión de adelantar negociaciones con la guerrilla. Al finalizar el primer período de Gobierno de Santos (Agosto de 2014), la aprobación había disminuido significativamente llegando al 59%. Sin embargo, cuando se indagaba sobre el

⁸En años anteriores las FARC tenían secuestrados a miembros de la Policía Nacional de Colombia, del Ejército Nacional de Colombia, tres contratistas estadounidenses, una candidata presidencial, y representantes de gobiernos locales.

⁹ Al momento de entrega de este documento, los dos puntos pendientes de discusión son los relacionados con el desescalamiento del conflicto armado y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

optimismo frente a lograr un acuerdo de paz este era menos concluyente: en Septiembre de 2012, entre el 54-57% indicaba ser optimista, este porcentaje se mantuvo al finalizar el primer período; tiempo en el que se cumplían dos años de negociación (Gallup Colombia, 2015; IPSOS Public Affairs, 2012). Esto último puede explicarse por la poca credibilidad que tiene la guerrilla entre los ciudadanos, cuya desaprobación es superior al 90%.

Pensar en la finalización del conflicto armado con la guerrilla de las FARC, tiene entre otras consecuencias, una reasignación del presupuesto nacional. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor gasto militar¹⁰ en proporción al Producto Interno Bruto (PIB): 3.5% del PIB nacional¹¹, porcentaje solo comparable con el gasto que realizó Estados Unidos en 2014 (3.5% del PIB) y muy por encima al gasto que realizado por otros países de la región como Brasil (1.3% del PIB), Chile (2% del PIB) y México (0.7% del PIB). Es de esperar, que una vez se finalice el conflicto en Colombia, parte del gasto militar, sea destinado no solo al fortalecimiento de la seguridad, sino a temas tan claves como la reparación y justicia para las víctimas, el apoyo productivo a zonas afectadas por el conflicto, así como en sectores claves para el desarrollo del país como la educación y la creación de empleos.

¹⁰ De acuerdo al Banco Mundial el gasto militar incluye todos los gastos corrientes y de capital relativos a las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz; los ministerios de defensa y demás organismos de Gobierno que participan en proyectos de defensa

¹¹ El PIB para 2014 fue de US\$377 millones.

3. Datos y Estadística descriptiva

3.1 Encuestas de opinión en Colombia

Para el propósito de este estudio, se utilizó como fuente principal los datos sobre la opinión pública para Colombia que provienen de las encuestas realizadas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés)¹² y el Barómetro de las Américas. Esta institución académica ha realizado encuestas de opinión para Colombia desde el 2004 sobre distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos y su relación con temas como legitimidad política y confianza en las instituciones, evaluación de los gobiernos, comportamiento electoral, entre otros más. En el caso de Colombia, la encuesta ha incluido un módulo especial de preguntas relacionadas con el conflicto armado y el proceso de paz¹³.

Las encuestas de LAPOP son anuales y contienen alrededor de 1.500 observaciones por año, son de representación nacional, estratificada por las cinco regiones geográficas del país y el Distrito Capital: Atlántico, Central, Oriental, el Pacífico, la Amazonia y Bogotá, cubriendo 84 municipios en 25 departamentos. Igualmente, se encuentra sub-estratificadas por el tamaño de los municipios, en el que aproximadamente el 75% de las encuestas realizadas fueron en zonas urbanas y un 25% en zonas rurales. Para este estudio, se usaron las encuestas realizadas entre 2004 y 2014.

La principal ventaja de usar esta base de datos es que incluye información sobre la relación que tienen los encuestados con el conflicto, mediante preguntas relacionadas con tres experiencias de violencia: la pérdida, el desplazamiento interno y el exilio de un familiar; como indicadores de victimización por el conflicto que vive el país. De tal manera que permite estimar el efecto que tienen dichos hechos victimizantes en la opinión pública con un nivel de información espacial específico: el municipio en el que viven los encuestados.

Entre el conjunto de preguntas diseñadas para identificar las actitudes de los ciudadanos sobre el conflicto armado del país y el tipo de salida que ve más favorable para finalizar puntualmente el que enfrenta con la guerrilla, se utiliza una pregunta específica que aparece de manera constante durante

¹² LAPOP es una institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, con más de 30 años de experiencia. Tiene su sede central en la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee). Fuente: El Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), www.LapopSurveys.org.

¹³ Información general sobre las encuestas, incluyendo su metodología, la formulación de las preguntas y sus principales resultados se encuentra disponible en la página web <http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/>.

todas las encuestas: “De las siguientes opciones para solucionar el conflicto con la guerrilla, ¿cuál cree que es la mejor?” Las opciones de respuesta incluyen: “Negociación, Uso de la fuerza militar y ambas”. Restringiendo la muestra a las dos primeras respuestas, se obtiene una muestra de 14.069 observaciones.

3.2 ¿Quiénes son víctimas del conflicto?

La Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas” define que una persona es reconocida como víctima cuando: *“Ha sufrido de manera individual o colectivamente un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno”* (Artículo 3°)¹⁴. De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas – RNI¹⁵, se estima que Colombia tiene registradas a la fecha, 7.7 millones de víctimas del conflicto armado, lo que representa aproximadamente el 16% del total de la población del país calculada en 48 millones de habitantes.

De igual manera y acorde a las estadísticas de la RNI el principal hecho victimizante registrado en la población víctima es el desplazamiento (79,8%) seguido por los homicidios (11,5%), las amenazas (3,5%), la desaparición forzada (1,9%) y otros (2,7%)¹⁶. “El desplazamiento forzoso es un fenómeno recurrente en Colombia” (Ibáñez, 2008). Sin embargo, es durante la década de los noventa que este se intensifica. El fortalecimiento de los grupos guerrilleros, junto con el surgimiento de los grupos paramilitares y el crecimiento del narcotráfico, cada uno en busca del control de territorios generó un incremento de ataques hacia la población civil, provocando el desplazamiento de la población. Los demás hechos victimizantes, aunque tienen un porcentaje de representación mucho menor, no significa que su ocurrencia sea irrelevante, por el contrario, son los principales detonantes del desplazamiento (Ibáñez, 2008).

Al detallar por ubicación geográfica el conflicto, los datos de la RNI indican que el departamento de Antioquía es el que registra el mayor número de víctimas en el país, seguido por los departamentos

¹⁴ La Ley establece que cuando una persona sea víctima por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985, solo tiene derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la ley como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

¹⁵ <http://rni.unidadvictimas.gov.co/>. La entidad responsable de la operación de esta herramienta es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad para las Víctimas).

¹⁶ Datos con corte a diciembre de 2015. Otros corresponde a: Secuestro, Acto terrorista/ Atentados/Combates/ Hostigamientos, Delitos contra la libertad y la integridad sexual, Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles. El reporte muestra el número de personas por hecho victimizante. Una persona puede reportar varios hechos victimizantes.

de Bolívar, Magdalena, Cesar, Choco, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander, evidencia de que el conflicto colombiano no está enfocado en una zona específica del país, sino que es un problema que afecta todo el territorio. Sin embargo, al detallar por la intensidad de la violencia, los registros indican que esta no ha sido homogénea. Un ejemplo de esto es lo registrado por el Grupo de Memoria Histórica, en su documento Basta ya! (GMH, 2013), en donde señalan que de los entre 1981 y 2012 se registraron homicidios en 950 municipios, el 85% del total de estos actos violentos ocurrió en 322 de ellos, lo que supone un alto nivel de afectación en el 30% del territorio nacional¹⁷. En el caso de desplazamiento forzado, este ha afectado al 97% del territorio colombiano. 139 municipios registraron más de 10.000 desplazados entre 1996 y 2012, concentrando el 74% del total de la población desplazada (GMH, 2013).

Otra manera de caracterizar a las víctimas es el *enfoque diferencial*, uno de los principios generales de la Ley de Víctimas (Artículo 13), en el que se reconoce que las medidas de ayuda humanitaria, así como las políticas de asistencia y reparación, deben adaptarse a las características particulares de la población y su grado de vulnerabilidad. Se puede distinguir a las víctimas por su pertenencia étnica, género, edad, condición de discapacidad, entre otros. Usando los datos disponibles con corte a diciembre de 2015 de la RNI, en el período de análisis para este documento, se observa que en promedio el 49% de las víctimas registradas son hombres y el 47% fueron mujeres¹⁸, estadística que no difiere del total de registros. Así como los datos permiten indicar que el conflicto no distingue entre género, lo mismo sucede con la edad. Si bien, el porcentaje de víctimas se encuentra en la población adulta (29,1%), los niños y jóvenes de Colombia también han sido víctimas del conflicto, principalmente por culpa del desplazamiento, la vinculación a grupos armados y bandas criminales, por homicidio y minas antipersona. Por grupos poblacionales específicos, los afrocolombianos (de raza negra, mulata, palenquera, y raizal) son los más afectados por el conflicto (64,1%), seguidos por los indígenas (26%) y otros grupos (9,9%).

3.3 Estadística Descriptiva

Las estadísticas descriptivas proporcionan algunas ideas iniciales sobre el comportamiento de la variable de interés. Con lo señalado anteriormente y conforme a la descripción del registro de víctimas, el conflicto armado ha afectado de manera directa e indirecta a los colombianos y que dicha relación ha permitido que las personas se formen una opinión frente al tema. El nivel de apoyo que se reciba sobre la mejor opción para finalizar un conflicto, ya sea mediante una

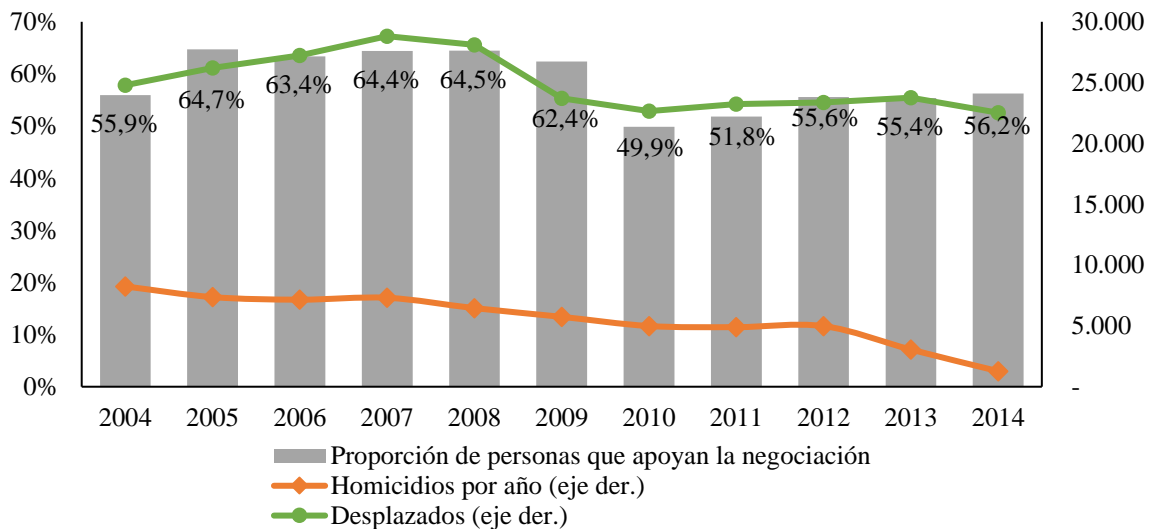
¹⁷ Colombia tiene una división político-administrativa de la siguiente manera: 32 departamentos y 1.123 municipios.

¹⁸ El porcentaje restante está distribuido en población LGBTI y otros sin conocimiento.

negociación entre las partes enfrentadas o el uso de la fuerza militar, será fundamental para las decisiones que el gobierno tome en materia de políticas de seguridad así como la preparación de instrumentos de política para revindicar y reparar a las víctimas del conflicto.

En el Gráfico 1 se muestra la relación entre el apoyo a una salida negociada y dos de los hechos victimizantes que más afectaron a los colombianos durante los 11 años analizados en este estudio. Por un lado, se puede observar que el apoyo hacia una salida negociada al conflicto armado con la guerrilla se encuentra en un rango superior al 50%, con excepción del 2011 y con puntos máximos entre 2005 y 2009. Es importante mencionar que en estos años el país venía enfrentando uno de los momentos más complicados del conflicto, pues se presentaban constantes enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas militares y de policía; las poblaciones, especialmente rurales, eran atacadas por los diferentes grupos armados ilegales, amenazando a sus pobladores, obligándolos a abandonar sus tierras. Adicionalmente el secuestro seguía siendo una actividad de presión por parte de la guerrilla de las FARC.

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados que apoyan la salida negociada al conflicto armado vs. Eventos de homicidios y desplazamientos registrados por año en el país



Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP y RNI-Unidad de Víctimas

Como se observa en el gráfico, entre 2005 y 2009, los homicidios permanecieron invariantes, mientras que los casos de desplazamiento iban en ascenso. Igualmente, se debe destacar la correlación que existe entre el apoyo a la negociación y los casos de desplazamiento. Cuando este último aumentó, el porcentaje de apoyo fue mayor, mientras que un menor registro de desplazamientos moderaba la opinión de los ciudadanos. Lo anterior indicaría que eventualmente

existiría una influencia de la intensidad del conflicto en que los encuestados vieran más cercana la salida negociada como solución al conflicto.

En la Tabla 1 se presenta la descripción estadística del apoyo a la negociación por características demográficas, para toda la muestra (columna 1) y por región geográfica. Los resultados de la tabla sugieren, que el apoyo promedio de la salida negociada es de 66.27%. Siendo la región del Atlántico la que presenta mayor favorabilidad hacia esta opción (72,68%) comparado con el escenario menos positivo de la capital colombiana (59,60%).

Ahora, cuando se detalla por las características de la población, si bien las diferencias no son muy amplias, si se pueden distinguir algunos rasgos que resultan de interés para el análisis. Cuando se observa la clasificación por género, en general son las mujeres las que muestran un mayor apoyo a la negociación respecto a los hombres, siendo la región Central donde se presenta la mayor distancia en opiniones con una brecha de más de 10 puntos porcentuales (pp) en las regiones de cada grupo.

Al considerar la etnicidad, los individuos pertenecientes a las etnias afrocolombiana e indígena, son los que mayor interés, en promedio, muestran al momento de inclinarse por la negociación, 72,70% y 71,67%, respectivamente, comparado con los que se identifican como blancos o mestizos. En el caso de la población de afrocolombianos, la mayoría de la población se encuentra ubicada en las costas del Pacífico y del Atlántico colombiano, por lo que son estas dos regiones donde hay mayor porcentaje de aprobación hacia la negociación. Por su parte la población indígena, si bien dentro de la muestra representan el 5% del total, su opinión sobre la salida negociada, es significativa, más aun sabiendo que junto a los afrocolombianos son las poblaciones más afectadas por la violencia.

Otra de las características de interés es la relacionada con la edad, teniendo en cuenta que el conflicto armado ha estado presente en la vida de los colombianos por más de cuatro décadas, son varias las generaciones las que se han visto involucradas de alguna manera con el conflicto. La edad promedio de los encuestados es de 37 años, lo que implica que es una población con conocimiento sobre la situación de violencia del país. Lo que se observa de la Tabla 1 de la muestra total es que el apoyo a la negociación se incrementa uniformemente con la edad. Cuando se detalla por región ocurre algo similar, excepto en la Amazonia donde la población más joven muestra un mayor porcentaje de apoyo (71,57%), comparado con una población mayor.

Tabla 1. Apoyo a la salida negociada por características demográficas y región geográfica

VARIABLES	Toda la muestra	Región					
		Atlántico	Pacífico	Oriental	Central	Amazonia	Bogotá
Todos los individuos	66,27%	72,68%	70,29%	62,09%	64,56%	69,80%	59,60%
Genero							
Mujer	69,78% (0.459)	74,57% (0.436)	72,25% (0.448)	66,48% (0.472)	70,30% (0.457)	69,01% (0.463)	63,69% (0.481)
Hombre	62,85% (0.483)	70,82% (0.455)	68,33% (0.465)	57,82% (0.494)	59,16% (0.492)	70,56% (0.457)	55,55% (0.497)
Etnia							
Blancos	64,44% (0.479)	74,62% (0.436)	66,61% (0.472)	61,56% (0.487)	64,49% (0.479)	74,03% (0.441)	58,20% (0.493)
Mestizos	65,57% (0.475)	70,71% (0.455)	69,76% (0.460)	63,19% (0.482)	63,14% (0.483)	70,16% (0.458)	59,75% (0.491)
Indígenas	71,67% (0.451)	83,33% (0.376)	77,89% (0.460)	58,62% (0.501)	70,76% (0.456)	64,57% (0.480)	59,57% (0.496)
Afrocolombianos	72,70% (0.446)	76,17% (0.427)	72,93% (0.445)	55,93% (0.501)	68,71% (0.465)	--	69,14% (0.465)
Otra	61,54% (0.488)	60,34% (0.493)	75,86% (0.435)	36,36% (0.505)	51,61% (0.508)	--	--
Edad							
Menores de 25 años	63,57% (0.481)	67,26% (0.470)	66,61% (0.471995)	57,99% (0.494)	63,03% (0.483)	71,57% (0.453)	60,70% (0.489)
Entre 25 y 35 años	63,48% (0.482)	69,78% (0.460)	69,89% (0.459)	58,48% (0.493)	62,17% (0.485)	66,47% (0.474)	53,46% (0.499)
Entre 36 y 45 años	68,01% (0.467)	77,11% (0.421)	71,46% (0.452)	66,00% (0.474)	63,60% (0.481)	75,76% (0.431)	59,40% (0.492)
Entre 46 y 55 años	70,18% (0.458)	76,86% (0.422)	70,85% (0.455)	68,42% (0.466)	69,19% (0.462)	71,67% (0.454)	64,19% (0.480)
Mayores de 56 años	71,10% (0.453)	77,98% (0.415)	75,21% (0.432)	66,67% (0.472)	69,03% (0.463)	64,29% (0.483)	66,67% (0.472)
Estado Civil							
Casado	68,14% (0.466)	74,84% (0.434)	71,74% (0.450)	64,52% (0.479)	66,94% (0.471)	68,32% (0.466)	59,75% (0.491)
Soltero	63,92% (0.480)	69,56% (0.460)	68,63% (0.464)	58,80% (0.493)	61,63% (0.486)	72,29% (0.449)	59,38% (0.491)
Ingresos Familiares Mensuales							
Pobreza extrema	72,15% (0.448)	78,03% (0.414)	77,90% (0.415)	63,30% (0.482)	71,10% (0.454)	70,56% (0.457)	63,79% (0.481)
Pobreza	63,62% (0.481)	71,54% (0.451)	66,07% (0.474)	61,38% (0.487)	60,92% (0.489)	67,24% (0.471)	58,44% (0.493)
Media	59,05% (0.492)	59,39% (0.492)	59,57% (0.492)	52,94% (0.501)	58,37% (0.494)	72,00% (0.458)	62,16% (0.486)
Alta	58,26% (0.495)	66,67% (0.485)	69,23% (0.480)	--	53,33% (0.516)	--	56,92% (0.499)
Zona de residencia							
Urbano	63,89% (0.480)	70,82% (0.455)	65,27% (0.476)	60,42% (0.489)	62,64% (0.484)	67,92% (0.468)	59,60% (0.491)
Rural	73,95% (0.439)	78,44% (0.412)	81,44% (0.389)	65,88% (0.475)	70,35% (0.457)	71,22% (0.454)	--

Errores estándar en paréntesis

Fuente: Cálculos del autor con base en LAPOP Colombia 2004-2014

Respecto a los ingresos familiares, se debe indicar que estos se construyeron con base en los indicadores de pobreza monetaria por familia. Esta variable se incluye con la intención de reflejar dos características: i) capturar las condiciones económicas de los encuestados y ii) reflejar las

condiciones de económicas de las víctimas, en términos de ingreso. Varios estudios sugieren que las pérdidas de bienestar para las víctimas de los conflictos internos son significativas. Específicamente para los hogares de personas desplazadas, la pérdida de activos, la imposibilidad de generar ingresos suficientes conllevan costos a largo plazo, lo que muy probablemente los convertirán en víctimas de la pobreza crónica (Ibáñez & Moya, 2010). Se puede observar tanto en los datos de toda la muestra como en la mayoría de las regiones, un favoritismo a la negociación en las personas de menores ingresos, alrededor de 14 pp por encima de los de mayores ingresos. Siendo la región central donde se presenta la mayor diferencia de opinión (18 pp).

Al comparar la opinión de las personas que viven en la zona rural respecto a las que viven en zonas urbanas se encuentra que las primeras reportan tener mayor afinidad a la negociación (73,95%), respecto a los que se encuentran en zonas urbanas (63,89%).

En la Tabla 2 se presenta la relación entre la variable de interés y los hechos victimizantes. En este caso, se puede observar que de las personas que apoyan la salida negociada, el 24,26%, indicaron haber perdido un familiar a causa del conflicto, 19% un familiar que sufrió de desplazamiento y un 4,72% uno que tuvo que salir del país. Estos porcentajes son similares cuando se va al detalle por características demográficas. Es importante mencionar que las preguntas sobre victimización de un familiar no tienen un límite temporal y, por consiguiente, no hacen referencia específica al pasado reciente, es decir se está abarcando todas las etapas del conflicto. Los encuestados estarían reflejando eventos recientes o situaciones de violencia que sucedieron décadas atrás.

Entrando al detalle, la discriminación racial y cultural se refleja en el dato de víctimas. La población afrocolombiana es la que presenta el mayor porcentaje de víctimas: 30,8% ha sufrido la pérdida de un conocido, 21,36% sabe de algún familiar que le ha tocado abandonar su sitio de vivienda y el 6,48% se fue exiliado por culpa del conflicto armado.

De igual manera, las personas que por su ingreso familiar mensual se encuentran dentro de la línea de pobreza extrema, son los que más manifiestan tener conocimiento de un familiar o un pariente cercano víctima del conflicto. En el caso de las víctimas por homicidio o desaparición, se presenta una diferencia de 12 pp entre los que se encuentran en pobreza extrema (27,23%) y los que están en el rango de ingresos más alto (14,93%). Contrario a lo que sucede con el hecho victimizante de migración al exterior, donde se puede observar un porcentaje mayor entre las personas de ingreso altos (8,96%) respecto a los de ingresos bajos. En el caso de desplazamiento, la diferencia no es

muy amplia. Esto indica que el desplazamiento ha sido un hecho que no diferencia de género, etnia, edad, estado civil e ingresos.

Tabla 2. Apoyo a la salida negociada por hechos victimizantes

VARIABLES	Pérdida o desaparición de un familiar	Desplazamiento interno de un familiar	Migración de familiar al exterior
Todos los individuos	24,26%	19,00%	4,72%
Genero			
Mujer	23,76% (0.430)	19,18% (0.394)	4,76% (0.213)
Hombre	24,80% (0.432)	18,80% (0.391)	4,68% (0.211)
Etnia			
Blancos	20,82% (0.406)	16,90% (0.375)	4,44% (0.201)
Mestizos	24,74% (0.432)	19,69% (0.40)	4,47% (0.207)
Indígenas	24,78% (0.432)	18,60% (0.390)	4,38% (0.205)
Afrocolombianos	30,80% (0.462)	21,36% (0.410)	6,48% (0.246)
Otra	28,41% (0.453)	25,29% (0.437)	7,95% (0.272)
Edad			
Menores de 25 años	23,72% (0.425)	18,91% (0.392)	3,93% (0.194)
Entre 25 y 35 años	24,20% (0.428)	20,34% (0.403)	4,34% (0.204)
Entre 36 y 45 años	25,06% (0.433)	20,01% (0.401)	5,30% (0.224)
Entre 46 y 55 años	25,23% (0.435)	17,82% (0.383)	6,00% (0.238)
Mayores de 56 años	23,21% (0.422)	16,06% (0.367)	4,75% (0.213)
Estado Civil			
Casado	24,23% (0.430)	20,37% (0.403)	4,43% (0.206)
Soltero	24,30% (0.429)	17,17% (0.377)	5,14% (0.221)
Ingresos Familiares Mensuales			
Pobreza extrema	27,23% (0.445)	20,38% (0.403)	3,98% (0.196)
Pobreza	22,76% (0.419)	18,74% (0.390)	4,99% (0.218)
Media	23,18% (0.422)	17,27% (0.378)	5,60% (0.230)
Alta	14,93% (0.360)	19,70% (0.401)	8,96% (0.288)
Zona de residencia			
Urbano	23,69% (0.425)	18,90% (0.391)	5,06% (0.219)
Rural	25,83% (0.438)	19,28% (0.395)	3,79% (0.219)
Observaciones	9.308	9.302	9.297

Errores estándar en paréntesis

Fuente: Cálculos del autor con base en LAPOP Colombia 2004-2014

3.4 Hipótesis del estudio

La teoría y el contexto permiten establecer las siguientes hipótesis a ser probadas:

- i. La victimización causada por el conflicto armado genera que los individuos sean menos propensos a apoyar la negociación como solución del conflicto que vive el país. En particular, los individuos que han vivido de manera directa o por medio de algún familiar la violencia presentarán una menor probabilidad de apoyar la negociación.
- ii. Poblaciones con características particulares (mujeres, grupos étnicos minoritarios, mayores de edad, con niveles bajos de ingresos), tendrán una opinión más favorable hacia la finalización del conflicto por medio de una negociación, debido a su condición de vulnerabilidad.
- iii. Teniendo en cuenta que el gobierno colombiano adelanta un proceso de paz con los grupos guerrilleros, declarar o registrar que el hecho victimizante fue responsabilidad de la guerrilla, influye en la opinión de los individuos, respecto al proceso de paz disminuyendo el apoyo al mismo. El resultado de esta estimación es de gran interés.
- iv. Individuos que reportan que sus familiares fueron víctimas recientes del conflicto, los vuelve menos propensos a optar por una salida negociada del conflicto.
- v. Individuos que viven en un municipio o ciudad con un alto número de eventos violentos y con presencia permanente de grupos armados, presentarán una mayor probabilidad de apoyar la negociación.

4. Marco Empírico

En esta sección se examina cómo la violencia vivida durante la última década en Colombia ha afectado la opinión de los colombianos respecto al apoyo de una posible salida negociada al conflicto armado. Es decir, se busca establecer una relación entre violencia y opinión pública hacia un hecho en concreto: la finalización de un conflicto armado con la guerrilla, la que se puede expresar por medio de un Modelo Lineal de Probabilidad (MLP) de la siguiente manera:

$$Y_{ijt} = \beta_1 P_i + \beta_2 D_i + \beta_3 M_i + X_{it}\gamma + \theta_j + \delta_t + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

Donde Y_{ijt} es una variable binaria que indica la preferencia hacia una negociación del individuo i ubicado en el municipio j en el año t de la encuesta. Esta variable toma el valor de 1 si la preferencia del individuo es hacia una negociación y 0 si prefiere el uso de la fuerza militar. Dentro de las variables explicativas se encuentran variables dummy que representan si el individuo i manifiesta haber tenido una experiencia cercana con el conflicto armado, por medio de tres variables que representan los hechos que más se registran en el país: la pérdida (P_i), el desplazamiento forzado (D_i) y/o la migración al exterior (M_i) por causa del conflicto de un familiar. X_{it} es una matriz de características de los individuos (género, edad, etnicidad, estado civil, ingreso familiar, zona de residencia)¹⁹. θ_j y δ_t son una especificación de efectos fijo de estado y tiempo respectivamente. ε_{ijt} es el término de error que considera un cluster a nivel de municipio.

Con el fin de ver con más detalle el efecto que tienen los hechos de victimización en la actitud hacia la salida del conflicto, se realizan varias especificaciones alternativas al modelo. La primera de ellas está relacionada con la identificación del responsable de los hechos. Debido a que el gobierno actual está llevando a cabo la negociación con uno de los grupos guerrilleros de más antigüedad en el país, causante de los más fuertes ataques a la población y de constantes enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado, se realiza una estimación condicionada a que las víctimas hayan sido responsabilidad de la guerrilla.

La segunda especificación, se realizó siguiendo el trabajo de Jaeger, Klor, Miaari, & Paserman, (2012), en el que se indaga el efecto de la violencia en la negociación y la radicalización de las posiciones políticas, usando los datos de víctimas mortales en varios períodos (establecidos por semanas), previos a la realización de la encuesta. En el caso del presente trabajo, no se contaba con

¹⁹ Ver anexo 1 para detalle de las variables.

el detalle de la información, sin embargo, se quiso aproximar a este ejercicio usando la información que la encuesta recolecta para los dos últimos años, cuando se comenzó a indagar si el evento ocurrió en los últimos 12 meses. De tal manera, que se realiza una estimación, con el objetivo de ver si un suceso reciente y con la particularidad de ser cercano al entrevistado, genera un efecto en la preferencia hacia una salida negociada del conflicto.

Finalmente, se indaga cómo el conflicto armado incide en el apoyo hacia la negociación. Es decir, se quiere ver si vivir en un municipio o ciudad con un alto número de eventos violentos y con presencia permanente de grupos armados, forma una percepción diferente del conflicto, frente a aquellos que viven una situación diferente, como lugares donde no hay conflicto o su intensidad es baja.

Efectos fijos de tiempo y municipio

Para el análisis de este estudio, se hizo relevante la aplicación de efectos fijos de tiempo y estado, que para este caso serán los municipios colombianos, debido a que se presenta variabilidad entre un municipio y otro. Como indican Jaeger, Klor, Miaari, & Paserman, (2014), el efecto fijo en el tiempo permite controlar los factores o hechos comunes que puedan afectar la variable dependiente, en este caso la opinión de apoyo a la salida negociada a través de todos los municipios en un punto determinado del tiempo. Lo mismo sucede con el uso de los efectos fijos en los municipios, pues permite mantener invariante en el tiempo los atributos de los municipios, identificando únicamente la variación que se genera en la opinión pública.

5. Resultados Empíricos

En la Tabla 3 se presentan los resultados para el modelo base, estimando el efecto que tiene la familiaridad con el conflicto en la preferencia de optar por una salida negociada del conflicto. La primera columna muestra solo el efecto que tiene la familiaridad con hechos victimizantes del conflicto, en la decisión de apoyar una salida negociada al conflicto colombiano. La segunda columna incluye un set de variables sociodemográficas, con efectos fijo de tiempo (años), mientras que la columna 3 presenta los resultados con efectos fijos de tiempo y estado (municipio).

Los coeficientes de las variables relacionadas con victimización por el conflicto armado, bajo las tres estimaciones, muestran que existe una relación negativa con la opción de la negociación como forma de finalizar el conflicto: en otras palabras, las personas que han vivido más de cerca el conflicto, por razones familiares o fueron ellos mismos víctimas, son menos propensos a apoyar una salida negociada. Con el uso de efectos fijos de tiempo y de estado se puede observar que estos estimadores resultan ser estadísticamente significativos. De tal manera que esta estimación permite corroborar la primera hipótesis.

Al incluir controles como características poblacionales, los resultados obtenidos son igualmente interesantes. Por ejemplo, se observa que la variable género resulta ser muy significativa y está indicando que los hombres son menos propensos a la negociación que las mujeres. Sin embargo, este resultado difiere al obtenidos tanto por Carlin, McCoy, & Subotic, (2016), quienes indican que las mujeres expresan menos apoyo que los hombres en el proceso de paz. De igual manera, el estudio realizado por Matanock & Garbiras, (2015) sugiere que cuando se trata de las medidas más dramáticas de apoyo al proceso de paz y la participación política, el efecto de las asociaciones más fuertes entre la guerrilla de las FARC y el tráfico de drogas es diferente para las mujeres que para los hombres. Es importante aclarar que estos dos trabajos se realizan para un período de tiempo más corto (2 años para el primero y 1 año para el segundo), mientras que el presente estudio reúne datos de 11 años, lo que podría ser la razón por la cual los resultados sean diferentes. Esto motiva a la exploración del análisis de heterogeneidad presentado más adelante.

En el caso de la variable relacionada con el estado civil, hay un efecto estadísticamente significativo y positivo para las personas casadas, respecto a quienes no lo están, lo que implica que las personas muestran un sentido de protección y de un mejor bienestar en el futuro, al mostrar mayor propensión a la negociación.

Tabla 3. Efecto de familiaridad con víctimas del conflicto en el apoyo a la salida negociada

VARIABLES	(1)	(2)	(3)
Pérdida o desaparición de un familiar	-0.014 (0.012)	-0.020* (0.011)	-0.023** (0.010)
Desplazamiento interno de un familiar	-0.041*** (0.012)	-0.041*** (0.012)	-0.036*** (0.011)
Migración de familiar al exterior	-0.061** (0.024)	-0.050** (0.023)	-0.050** (0.022)
Hombre		-0.063*** (0.009)	-0.065*** (0.009)
Mestizos		0.021** (0.010)	0.006 (0.011)
Indígenas		0.035 (0.030)	0.001 (0.017)
Afrocolombianos		0.085*** (0.019)	0.056*** (0.018)
Otra		-0.032 (0.050)	-0.072 (0.050)
Entre 25 y 35 años		-0.009 (0.014)	-0.013 (0.014)
Entre 36 y 45 años		0.026* (0.015)	0.024 (0.015)
Entre 46 y 55 años		0.061*** (0.015)	0.058*** (0.014)
Mayores de 56 años		0.067*** (0.017)	0.069*** (0.017)
Casado		0.025*** (0.009)	0.020** (0.008)
Pobreza		-0.057*** (0.012)	-0.032*** (0.011)
Media		-0.092*** (0.027)	-0.058** (0.026)
Alto		-0.063** (0.031)	-0.014 (0.031)
Urbana		-0.074*** (0.016)	-0.034*** (0.012)
Observaciones	12.051	12.051	12.051
Efectos fijos de tiempo	No	Si	Si
Efectos fijos de estado	No	No	Si

Errores estándar robustos en paréntesis.

Considera clúster de municipios

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Por otro lado, cuando se indaga por grupos poblacionales, se observa una correlación positiva entre los distintos tipos de razas y la salida negociada del conflicto. En particular, las pérdidas y transformaciones experimentadas por las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas tienen una dimensión y complejidad particular (GMH, 2013). Llama la atención el coeficiente significativo y de mayor valor (8.5 pp) de la población afrocolombiana. Este resultado es consistente con lo obtenido por García Sanchez, (2011) quien junto a Barómetro de las Américas-LAPOP y el Observatorio de la Democracia, realizó un estudio de opinión pública enfocado en la población afrocolombiana. Al indagar sobre la actitud respecto a las posibles salidas del conflicto con la guerrilla, en esta población, se obtuvo que, en promedio, los afrocolombianos tienen actitudes más favorables a una posible solución negociada (60%), frente a los colombianos no Afro (50%).

Respecto a los rangos de edad, es la población adulta y mayor quienes presentan coeficientes significativos y positivos a la negociación. Lo anterior demostraría la existencia de una relación con el tiempo de duración del conflicto. La población que se encuentra en el rango de edad superior a los 46 años es la que ha vivido los momentos más difíciles y fuertes de violencia, de tal manera que es de suponer que su preferencia hacia una salida negociada sea mayor que la población más joven, que si bien, conoce del conflicto, no vivieron episodios de violencia más fuerte que los actuales como los ocurridos en la década de los 90 (cuando la población adulta actual, era joven) y más bien está más afectada por otros hechos de violencia como lo puede ser la delincuencia común y el microtráfico.

Por último, se puede observar en la Tabla 3 estimaciones de acuerdo a ingresos familiares y su ubicación en zonas urbanas. Ambas variables presentan una percepción más negativa frente a la solución de una salida negociada del conflicto. Los colombianos que se encuentran en zonas urbanas son menos propensos a optar por la negociación que quienes viven en zonas rurales. Si bien en las grandes ciudades, los hechos de violencia a causa del conflicto como los ataques son menos evidentes, el conflicto se ha consolidado en las ciudades puesto que es allí donde llega población desplazada por causa de la violencia armada en zonas rurales, generando efectos como el aumento de las tasas de desempleo y el incremento de la ubicación de población en zonas subnormales de algunos municipios. Señales de esto se pueden ver en los niveles de ingreso que percibe la población desplazada, así como la falta de oportunidades laborales y la pérdida de activos²⁰ tal

²⁰ Como resultado de esta dinámica, un 95% de los hogares desplazados en 2005 estaban por debajo de la línea de pobreza y un 75% debajo de la línea de pobreza extrema (Ibáñez, 2008).

como lo mencionan Ibáñez y Moya, (2010). Estos mismos autores señalan que la población que decide permanecer en las zonas de conflicto también enfrenta caídas en sus ingresos, tal vez más sutiles y, por lo mismo, más difíciles de reparar. Adicionalmente, aclaran que la cuantificación de los impactos económicos del conflicto sobre esta población es difícil, pues no hay mucha información.

Tabla 4. Efecto en la opinión pública antes y durante el proceso de negociación

VARIABLES	(1)
Pérdida o desaparición de un familiar	-0.025** (0.012)
Desplazamiento interno de un familiar	-0.031** (0.014)
Migración de familiar al exterior	-0.045** (0.022)
Durante el proceso de negociación	0.0009 (0.029)
Pérdida x Durante el proceso de negociación	0.011 (0.023)
Desplazamiento x Durante el proceso de negociación	-0.024 (0.027)
Migración x Durante el proceso de negociación	-0.020 (0.058)
Observaciones	12.051
Efectos fijos de tiempo	Si
Efectos fijos de estado	Si

Errores estándar robustos en paréntesis. Considera clúster de municipios

Las estimaciones incluyen las variables control relacionadas con las características poblacionales y mantienen la significancia y el signo observados en la tabla 3.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

La anterior estimación mostraba el resultado durante todo el período de la muestra, pero teniendo en cuenta que en agosto de 2012, el gobierno colombiano inicio un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, se hace necesario verificar si este escenario influyó en la opinión de los encuestados, especialmente de los familiares de las víctimas. En la Tabla 4 se muestra qué sucede con la opinión en los dos últimos años de la encuesta, en los que se firmaron dos de los seis puntos de la agenda de negociación, los relacionados con desarrollo agrario y la participación en política del grupo guerrillero. Dos temas sensibles a la opinión, el primero porque implica la formulación de una reforma rural y la continuación con el proceso de restitución de tierras. Mientras que el segundo acuerdo es un tema controversial para la población, debido a la imagen negativa que tienen

los colombianos respecto a las FARC y que se refleja en una menor aprobación a este tipo de acuerdos, tal como lo señalan en su estudio Matanock & Garbiras, (2015).

Lo que se puede observar en la estimación de la Tabla 4 es que durante el proceso de negociación no se presenta variación en la opinión, el coeficiente resulta ser muy pequeño (cerca a cero) y no significativo. En los casos de familiares con víctimas de desplazamiento y que migraron al exterior, los coeficientes se mantienen negativos y resultan no significativos, lo que indica que la opción de la negociación y los acuerdos hasta esa fecha firmados no estarían siendo respaldados por este conjunto de la población. Por su parte, los que indicaron haber perdido un familiar por causa del conflicto, cambiarían su opinión, aumentando la probabilidad de por la opción de negociación en 1.1 pp, sin embargo, este es un resultado no significativo y es un efecto menor al obtenido en los años anteriores antes de iniciar el proceso. Es importante aclarar que el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, no alcanza a evaluarse en esta estimación debido a que este se firmó en diciembre de 2015. Este es un punto que podría evaluarse en una futura investigación.

5.1 Efectos heterogéneos de la familiaridad con los hechos victimizantes

La Tabla 5 resume los resultados de los efectos heterogéneos entre las variables de victimización y las características de poblaciones específicas: el género, el estado civil, la edad y la etnia. Los coeficientes individuales de las características poblacionales el signo negativo que se observó en la tabla anterior, estos no se muestran para no exceder la extensión de la tabla.

En la columna 1 se presentan los efectos heterogéneos relacionados con el género. Lo primero que hay que indicar es que al aplicar el test de post estimación, se encuentra que los coeficientes no son estadísticamente distintos para los hombres que para las mujeres. En todos los casos estos resultan negativos y resultan ser significativos al 5% y 1% en el caso de familiares de desplazados y de migrantes, respectivamente. Se puede observar que las mujeres que revelan tener familiares víctimas por causa de la guerra, tienen una probabilidad menor de optar por la negociación que los hombres. Lo cual coincide con los estudios mencionados anteriormente respecto a esta variable, en donde se indica que la posición de las mujeres es más radical respecto al proceso de paz y sus alcances.

Un análisis similar se presenta cuando se hace el análisis con la variable de estado civil, donde todos los coeficientes resultan negativos, siendo este resultado más significativo y de mayor rechazo a la negociación por parte de los encuestados que son casados y que tienen familiares exiliados en el

exterior (6.9 pp) y que perdieron un familiar (3.6 pp), a diferencia de los que son solteros cuyos coeficientes resultaron no significativos. En el caso de familiares víctimas de desplazamiento, se encuentra que los coeficientes son estadísticamente distintos al 10%, y se revela que los encuestados solteros que señalaron tener familiares desplazados influyen más en la menor probabilidad de preferir la negociación en 6.1 pp.

Ahora bien, en la interacción entre la edad y los hechos victimizantes, se incluyen en la Tabla 5 los extremos de los tramos, los encuestados más jóvenes (menores de 25 años) y los de mayor edad (superior a 56 años). Por un lado, se encontró que los individuos mayores de 56 años que declararon tener un familiar que migró al exterior a causa del conflicto, tienden a favorecer más la negociación, con una probabilidad de 7.2 pp más que los jóvenes con familiares en el exterior, que por el contrario muestran un resultado negativo y significativo, implicando una probabilidad de rechazo de 10.3 pp.

La población afrocolombiano con familiares que salieron del país a causa del conflicto también muestra un resultado favorecedor a la negociación. Lo anterior podría indicar un deseo por parte de los individuos de esperar que sus familiares puedan retornar al país, una vez se haya mejorado la situación de violencia y económica del país, derivado de una paz negociada. Ibáñez, (2008) hace referencia a este tema, e indica que las razones para desear retornar residen en factores de expulsión y no en factores de atracción, es decir, en una percepción de unas mejores condiciones en el lugar de origen. Adicionalmente, los estudios relacionados con la población migrante, demuestran que el deseo de retornar de las personas mayores es más alto, pues estas enfrentan más dificultades para adaptarse a una nueva ciudad y sus costumbres. Finalmente, en los hechos victimizantes de pérdida o desaparición y desplazamiento, ambos grupos poblacionales demuestran una menor probabilidad de apoyo a la negociación, siendo el coeficiente de pérdida de la población más adulta, el de mayor valor y significancia (6.9 pp).

Respecto a los estimadores relacionados con los grupos étnicos, se encontró que la población blanca con familiares víctimas de la violencia es menos propensas a la negociación que los afrocolombianos. En el caso de la población indígena, si bien en la tabla anterior se mostraba que la probabilidad de preferir la negociación cuando se pertenecía a este grupo étnico era mayor que otros grupos étnicos como los blancos, cuando se hace la interacción se encuentra que en los casos en los que informaban tener familiares desplazados o que tuvieron que emigrar al exterior la probabilidad de apoyo disminuye en 10 pp y 14 pp, respectivamente, alejándolos de la posición de negociación.

Como está señalado por el GMH, (2013) los pueblos indígenas junto con las comunidades de afrocolombianos, han tenido que enfrentarse a los grupos armados por territorios que antes eran exclusivos para ellos, heredados por sus ancestros y que se han visto obligados a entregar, lo que lleva no solo a un despojo de tierra, sino a una pérdida cultural, poniendo en alto riesgo la existencia de estas comunidades²¹. La situación de la población afrocolombiana es similar, en el caso de la población desplazada esta muestra una probabilidad menor de 6.1 pp, de optar por la negociación. Para estas comunidades, el desplazamiento forzado no solo implica un alejamiento de un territorio, sino también un rompimiento de vínculos con su identidad como grupo, como puede ser el lenguaje y sus costumbres.

Tabla 5. Efectos heterogéneos de la familiaridad con víctimas por características poblacionales en el apoyo a la negociación

VARIABLES	(1) Género	(2) Estado Civil	(3) Edad	(4) Etnia
Pérdida x Hombre	-0.018 (0.119)			
Desplazamiento x Hombre	-0.035** (0.173)			
Migración x Hombre	-0.045* (0.269)			
Pérdida x Mujer	-0.025 (0.169)			
Desplazamiento x Mujer	-0.040** (0.016)			
Migración x Mujer	-0.054* (0.031)			
Pérdida x Casado		-0.036** (0.016)		
Desplazamiento x Casado		-0.021 (0.017)		
Migración x Casado		-0.069** (0.032)		
Pérdida x Soltero		-0.003 (0.015)		
Desplazamiento x Soltero		-0.061*** (0.015)		
Migración x Soltero		-0.023 (0.027)		
Pérdida x Menores de 25 años			-0.013 (0.018)	
Desplazamiento x Menores de 25 años			-0.037 (0.024)	

²¹ De acuerdo con los datos de ACNUR, los indígenas representan el 2,74% del total de la población colombiana, y el 3,4% de la población desplazada interna, para un total de 106.562 personas desplazadas entre 1997 y 2011, (GMH, 2013).

VARIABLES	(1) Género	(2) Estado Civil	(3) Edad	(4) Etnia
Migración x Menores de 25 años			-0.103** (0.051)	
Pérdida x Mayores de 56 años			-0.069** (0.026)	
Desplazamiento x Mayores de 56 años			-0.028 (0.029)	
Migración x Mayores de 56 años			0.072 (0.060)	
Pérdida x Blancos				-0.032* (0.019)
Desplazamiento x Blancos				-0.022 (0.018)
Migración x Blancos				-0.088** (0.034)
Pérdida x Indígena				0.005 (0.037)
Desplazamiento x Indígena				-0.101** (0.050)
Migración x Indígena				-0.140 (0.083)
Pérdida x Afrocolombiano				0.014* (0.028)
Desplazamiento x Afrocolombiano				-0.061** (0.027)
Migración x Afrocolombiano				0.028 (0.051)
Efectos fijos de tiempo	Si	Si	Si	Si
Efectos fijos de estado	Si	Si	Si	Si
Observaciones	12.103	12.103	12.103	12.103

Errores estándar robustos en paréntesis. Considera clúster de municipios.

Las estimaciones incluyen las variables control relacionadas con las características poblacionales.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

5.2. Efectos de victimización por causa de la guerrilla y temporalidad

En la columna 1 de la Tabla 6 se presentan los resultados al estimar qué sucede con la opinión pública respecto a la finalización del conflicto por medio de la negociación cuando los entrevistados manifiestan que el causante del hecho victimizante fue la guerrilla. En este caso se encuentra que si bien existe una relación negativa cuando se declara que el causante del hecho ha sido otro actor del conflicto (entiéndase paramilitares, bandas criminales, ejército o la policía), al indicar que ha sido la guerrilla, el resultado es una relación negativa y de mayor magnitud en los tres hechos evaluados en los hechos de desplazamiento interno (6.5 pp) y de migración al exterior (8.1 pp). Como se ha indicado antes, la guerrilla es uno de los principales victimarios y es responsable de casi la mitad del desplazamiento ocurrido en el país (45,8%), tal como lo señala Ibáñez, (2008). Estos resultados

confirma la tercera hipótesis planteada y coinciden con un estudio reciente realizado por Carlin, McCoy, & Subotic, (2016) en el que indican que el apoyo a la negociación está en función de la confianza que las personas tengan en los actores que se encuentra negociando, en este caso el gobierno y las FARC. Encontrando que cuando las personas han sido víctimas de la guerrilla, hay menos confianza en los actores y menor apoyo a la negociación como solución del conflicto.

Tabla 6. Efecto de la guerrilla como causante del hecho victimizante en el apoyo a la negociación

VARIABLES	(1)	(2)
Pérdida de un familiar causado por otro actor del conflicto	-0.020 (0.019)	
Pérdida de un familiar causado por la guerrilla	-0.026 (0.016)	
Desplazamiento interno de un familiar causado por otro actor del conflicto	-0.005 (0.019)	
Desplazamiento interno de un familiar causado por la guerrilla	-0.065*** (0.018)	
Migración de familiar al exterior causado por otro actor del conflicto	-0.013 (0.039)	
Migración de familiar al exterior causado por la guerrilla	-0.081** (0.035)	
Pérdida o desaparición de un familiar superior a los 12 meses		0.007 (0.024)
Pérdida o desaparición de un familiar en los últimos 12 meses		-0.138** (0.053)
Desplazamiento interno de un familiar superior a los 12 meses		-0.061** (0.024)
Desplazamiento interno de un familiar en los últimos 12 meses		-0.062 (0.060)
Migración de familiar al exterior superior a los 12 meses		-0.081 (0.066)
Migración de familiar al exterior en los últimos 12 meses		0.019 (0.108)
Efectos fijos de tiempo	Si	Si
Efectos fijos de estado	Si	Si
Observaciones	10.423	2.249

Errores estándar robustos en paréntesis. Considera clúster de municipios.

Las estimaciones incluyen las variables control relacionadas con las características poblacionales.

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

De igual manera se analiza el efecto que hay sobre la opinión cuando el hecho victimizante ocurrió en los últimos 12 meses previos a la encuesta²². Los resultados muestran que existe una diferencia en el signo de los coeficientes, dependiendo del hecho victimizante. Por un lado, cuando la pérdida de un familiar es muy reciente, hay una relación estadísticamente significativa, con una magnitud

²² El número de observaciones se reduce en esta estimación debido a que esta pregunta solo se realizó para los dos últimos años (2013-2014).

negativa hacia la salida negociada de 13.8pp, mientras que cuando es superior a los 12 meses, la significancia se pierde y el signo del coeficiente cambia, un resultado muy pequeño (0.7 pp). Esto puede estar implicando que las personas tienen una posición más radical entre más cercano en el tiempo ocurre el hecho y que este es un efecto temporal y se desvanece con el tiempo, lo que va en línea con lo encontrado por Jaeger, Klor, Miaari, & Paserman, (2012). Aquí se estaría aplicando el concepto de “*recency bias*”, puesto que la respuesta de las personas se ven influenciadas más por los hechos más recientes que por aquellos que llevan más tiempo de ocurrido.

En el caso del desplazamiento, la situación es diferente. El desplazamiento forzoso, es la expresión más dramática de la victimización de la población civil (Ibáñez, 2008). Es un hecho que deja a la población en situación de vulnerabilidad en un periodo inicial y que se extenderá al largo plazo. Las personas que lo viven, así como sus familiares, tienen que enfrentarse a abandonar su vivienda, sus pertenencias, deterioran sus condiciones laborales y pierden vínculos familiares y sociales, necesarios para el desarrollo de las personas. De tal manera que al observar el resultado de la Tabla 5, los coeficientes relacionados con desplazamiento presentan la misma magnitud (6.0 pp) y una relación negativa respecto a la negociación.

Por último, en la Tabla 7 se presentan los resultados de estimar qué sucede con la opinión cuando se controla por tipología del conflicto. Comparado con los municipios tienen una baja intensidad del conflicto, aquellos que registran alta intensidad, tienen una reacción mínima a la posibilidad de una negociación, excepto cuando las personas declaran tener familiares exiliados, quienes muestran una menor probabilidad de apoyo (9.9 pp) respecto a los que viven en zonas de baja intensidad. Esto puede deberse a que quienes residen en lugares con una presencia prolongada del conflicto, están acostumbrados a vivir en el conflicto.

Por otro lado, cuando se hace el análisis respecto a la presencia de grupos armados ilegales en los municipios, esto se puede interpretar que sus habitantes están en una constante sensación de inseguridad, de tal manera que prefieran irse del municipio, ante la posibilidad de amenazas, hostigamientos o ataques, aumentando, especialmente, el desplazamiento interno. Quienes indican que un conocido fue desplazado y se encuentran en estas zonas, sentirán un sentimiento de abandono o fracturación familiar por lo que su reacción será en desconfiar de la posibilidad de una negociación con los responsables de estos hechos, disminuyendo la probabilidad de apoyo en 5.7pp, frente a un resultado inferior (3.6pp) de quienes se encuentran en zonas donde no hay evidencia de presencia armada.

Tabla 7. Efectos heterogéneos de la familiaridad con víctimas por la tipología de los municipios según el conflicto armado

VARIABLES	(1)	(2)
Pérdida o desaparición de un familiar	-0.023 (0.016)	-0.023** (0.010)
Desplazamiento interno de un familiar	-0.040* (0.018)	-0.036*** (0.011)
Migración de familiar al exterior	0.013 (0.036)	0.050** (0.021)
Pérdida x Intensidad alta	0.0006 (0.021)	
Desplazamiento x Intensidad alta	0.008 (0.022)	
Migración x Intensidad alta	-0.099** (0.040)	
Pérdida x Permanente		0.078 (0.213)
Desplazado x Permanente		-0.057 (0.144)
Migración x Permanente		0.526*** (0.128)
Efectos fijos de tiempo	Si	Si
Efectos fijos de estado	Si	Si
Observaciones	12.051	12.051

Errores estándar robustos en paréntesis. Considera clúster de municipios.

Las estimaciones incluyen las variables control relacionadas con las características poblacionales.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

6. Discusión y Conclusiones

El propósito de esta investigación es examinar de manera empírica qué sucede con la opinión pública, respecto a la posible salida negociada del conflicto armado que vive el país, cuando los individuos revelan conocer de manera cercana o familiar a víctimas del conflicto.

El número de víctimas del conflicto armado registradas en Colombia está alrededor de los 7,7 millones, lo que implica que aproximadamente el 16% del total de la población, ha padecido los flagelos de la guerra y la violencia del país. Razón más que suficiente para indagar sobre la actitud que tienen quienes más cerca han vivido el conflicto, respecto al proceso de paz con uno de los grupos guerrilleros más antiguos del mundo y que más víctimas ha dejado.

Los resultados de este estudio permiten demostrar que los negociadores involucrados en el proceso de paz que adelanta el país, deben tener en cuenta no solo la opinión general de la población respecto a la negociación, sino la de la población más afectada por la violencia vivida en el país, las víctimas del conflicto. Se evidencia que los individuos que han vivido de manera directa o por medio de algún familiar la violencia presentarán una menor probabilidad de apoyar la negociación. Esta posición se reafirma cuando el hecho victimizante fue responsabilidad de la guerrilla, cuando la pérdida familiar es reciente y cuando hay familiaridad con víctimas de desplazamiento. Por otro lado, de acuerdo a características poblacionales, la opinión respecto a la negociación es más favorable para los afrocolombianos, los indígenas y las personas mayores, y esto es importante para legitimar el proceso de negociación y orientar las políticas públicas enfocadas a esta población. En este último punto, el gobierno colombiano ha avanzado a partir de lo estipulado por la formulación de la Ley de Víctimas, la cual reconoce que estos grupos requieren una atención, asistencia y reparación.

Conocer la opinión de las víctimas es relevante porque permite tener un mejor entendimiento de su rol en el conflicto y contribuirá, tanto a la construcción de la teoría como al desarrollo de políticas públicas. Su participación se hace necesaria para que se conozcan sus vivencias, sus propuestas y de esta manera influir en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad, justicia y socio-económicas que permitan reconocerlos como víctimas y devolverles la dignidad como ciudadanos, sus derechos y deberes.

Con la finalización del conflicto, viene un proceso de reparación y de promoción de la reconciliación entre víctimas y victimarios. Este es el mayor desafío para las políticas públicas, establecer las bases de los procesos de reconciliación que reduzcan los costos psicológicos negativos para las víctimas como el rencor, el miedo, la ansiedad y al mismo tiempo se generen beneficios sociales positivos como la inclusión social de ambas partes, superar la estigmatización y una mejor calidad de vida. De tal manera, que se hace necesario que el Estado ponga en marcha acciones que permitan la recuperación emocional y convivencia, como son espacios para el diálogos de reconciliación, intervenciones de las diferentes instituciones como la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Salud, que ofrezcan servicios de terapias que permitan aliviar y sanar traumas causadas por la guerra, terapias de perdón colectivas e individuales entre víctimas y victimarios. Para esto, se deben implementar programas que permitan una adecuada intervención a las víctimas del conflicto armado, comenzando por los funcionarios públicos de a entidades públicas y privadas involucradas en el tema.

Por último, debe existir una articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales, especialmente, en aquellas zonas más golpeadas por el conflicto para que se garantice la no repetición de violaciones de los derechos humanos, tal como se promueve en el quinto acuerdo sobre víctimas del proceso de negociación que se lleva a cabo. Esto debe incluir no solo la asignación de recursos para la protección de las zonas, sino también en el fortalecimiento de las actividades de entidades que promueven y monitorean el cumplimiento de los derechos humanos.

Referencias

- Bonilla, J. I. (2004). Medios de comunicación, opinión pública y conflicto armado. El consenso por otras vías. *Síntesis. Anuario Social, Político Y Económico de Colombia*, 9–30.
- Cárdenas, J. D. (2013). Opinión pública y proceso de paz: actitudes e imaginarios de los bogotanos frente al proceso de paz de la Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. *Ciudad Paz-Ando Dossier*, 6, 41–58.
- Carlin, R. E., McCoy, J. L., & Subotic, J. (2016). *Legitimacy Deficits in Colombia's Peace Talks : Legitimacy Deficits in Colombia's Peace Talks : Elites, Trust, and Support for Transitional Justice* (Research and Innovation Grants Working Papers Series). Tomado de <http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/DFG-GSU-Publication#.V0dsgpHhC00>
- Dube, O., & Vargas, J. F. (2013). Commodity Price Shocks and Civil Conflict: Evidence from Colombia. *Review of Economic Studies*, 80(4), 1384–1421. Tomado de <http://doi.org/10.1093/restud/rdt009>
- Espinosa, N. (2011). “Dime qué fuente usas y te diré qué análisis presentas”. Balance conceptual y metodológico de bases de datos sobre conflicto armado en Colombia. *Universitas Humanística*, 72, 297–320. Tomado de www.scielo.org.co/pdf/unih/n72/n72a13.pdf
- Fielding, D., & Penny, M. (2009). What Causes Changes in Opinion about the Israeli--Palestinian Peace Process? *Journal of Peace Research*, 46(1), 99–118. Tomado de <http://doi.org/10.1177/0022343308098406>
- Gallup Colombia. (2015). Encuesta de opinión Colombia Junio 2015 Contenido.
- García Sánchez, M. (2011). *Cultura política de la democracia en Colombia*, 2011 Actitudes democráticas de la población.
- Gartner, S. S., & Segura, G. M. (1998). War, Casualties, and Public Opinion. *The Journal of Conflict Resolution*, 42(3), 278–300. Tomado de <http://www.jstor.org/stable/174515>
- GMH, (2013). *Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional. Obtenido de <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ibáñez, A. M. (2008). *El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza*. (Ediciones Uniandes, Ed.) (Colección CEDE). Bogotá.
- Ibáñez, A. M., & Moya, A. (2010). Vulnerability of Victims of Civil Conflicts: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia. *World Development*, 38(4), 647–663. Tomado de <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.015>
- IPSOS Public Affairs, N. F. (2012). *20 años de opinión pública sobre procesos de paz en Colombia*. Bogotá: IPSOS. Obtenido de <http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-334224-intentos-de-paz-colombia>
- Jaeger, D. A., Klor, E. F., Miaari, S. H., & Paserman, M. D. (2012). The struggle for Palestinian hearts and minds: Violence and public opinion in the Second Intifada. *Journal of Public Economics*, 96(3-4), 354–368. Tomado de <http://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.12.001>

Jaeger, D. A., Klor, E. F., Miaari, S. H., & Paserman, M. D. (2014). Can Militants Use Violence to Win Public Support? Evidence from the Second Intifada. *Journal of Conflict Resolution*, 59(3), 528–549. Tomado de <http://doi.org/10.1177/0022002713516843>

Ley 1448 de 2011. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia 10 de Junio de 2011

Matanock, A. M., & Garbiras, N. (2015). Running Candidates after Running Drugs ? Evidence on a Possible Path to Peace from a Survey Experiment in Colombia.

Mueller, J. (1973) *War, Presidents and Public Opinion*. New York: John Wiley & Sons

Peco, M., & Peral, L. (2005). *El Conflicto de Colombia*. (S. G. T. Ministerio de Defensa & I. de E. I. y E. "Francisco de V. U. C. I. de Madrid, Eds.).

Redacción de El País. (27 de Mayo 2014). Tras 50 años de guerra, las Farc están débiles más no derrotadas. (El País). Tomado de <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/tras-50-anos-guerra-farc-estan-debiles-derrotadas>

Restrepo, J. (2004). Problemas en la medición del impacto humano en el conflicto armado colombiano. Bogotá: CERAC. Tomado de <http://www.cerac.org.co/assets/files/articulos/ProblemasHRConflicto.pdf>

Revista Semana. (3 de Julio 2011) Miembros de las AUC sumaban 15.000 o 16.000, al final se desmovilizaron 31.000": 'El Alemán'. (Semana). Tomado de <http://www.semana.com/nacion/articulo/miembros-auc-sumaban-15000-16000-final-desmovilizaron-31000-el-aleman/236468-3>

Restrepo, J., Spagat, M., & Vargas, J. F. (2004). The Dynamics of the Colombian Civil Conflict: A New Data Set. *Homo Oeconomicus*, 21(2), 396–428. Tomado de <http://doi.org/10.2139/ssrn.480247>

Santa Maria, M., Rojas, N., & Hernández, G. (2013). Crecimiento económico y Conflicto Armado en Colombia. *Archivos de Economía*, (400), 1–12. Tomado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/EstudiosEconomicos/400.pdf>

Trumbore, P. F. (1998). Public Opinion as a Domestic Constraint in International Negotiations: Two-Level Games in the Anglo-Irish Peace Process. *International Studies Quarterly*, 42(3), 545–565. Tomado de <http://doi.org/10.1111/0020-8833.00095>

Uribe, C. (2012). Opinión pública y conflicto colombiano en el gobierno de Santos. Bogotá. Tomado de <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Villa, E., Restrepo, J., & Moscoso, M. (2014). Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia. Bogotá.

Anexos

Anexo 1

Definición de variables

Fuente	VARIABLES	Definición
Encuesta de opinión de LAPOP- Barómetro	Año	Año de la entrevista
	Región	Estratificación por región geográfica de Colombia
	Departamento	Departamento donde fue hecha la entrevista identificado con código del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
	Municipio	Municipio donde fue hecha la entrevista identificado con el código del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
	Zona de residencia	1 si el entrevistado se encuentra en zona urbana
	Género	1 si es Hombre
	Edad	Edad del entrevistado por tramos
	Estado Civil	1 si es Casado
	Etnicidad	Pertenencia étnica del entrevistado. 1 si es blanco, 2 si es mestizo, 3 indígena, 4 si es afrocolombiano y 5 otra
	Ingresos Familiares	Ingresos familiares mensuales: 1 si está ubicado en el indicador de pobreza extrema, 4 con ingresos altos
	Negociación	1 si la respuesta es una salida negociada cuando se pregunta: ¿La mejor solución al conflicto armado se encuentra en una negociación o en el uso de la fuerza militar con la guerrilla?
	Pérdida de un familiar	1 si el entrevistado responde de manera afirmativa a la pregunta: ¿Ud. ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano, a consecuencia del conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?
	Desplazamiento interno	1 si el entrevistado responde de manera afirmativa a la pregunta: ¿Algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto que sufre el país?
	Migración al exterior	1 si el entrevistado responde de manera afirmativa a la pregunta: ¿Por razones de conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?
CERAC	Guerrilla	1 si el entrevistado indica como responsable de alguno de los hechos victimizantes a la guerrilla
	Presencia de grupos armados	1 si es Permanente 0 si no hay evidencia de presencia de grupos armados
	Intensidad	1 si es alta